



Señores

JUZGADO 09 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

REFERENCIA: ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA

RADICACIÓN: 2023 - 393

DEMANDANTE: CARLOS EDUARDO JIMENEZ LOAIZA

DEMANDADO: COLFONDOS S.A

**ALVARO JOSE ESCOBAR LOZADA**, identificado como aparece al pie de mi firma, como apoderado del demandante, en atención al auto notificado por estado el 16 de agosto, por medio del presente escrito me permito **subsana** la **demand** modificando en numeral segundo del acápite de pretensiones en el sentido que se aclara que los intereses moratorios que se solicitan son los de la pensión de invalidez.

En vista de lo anterior solicito se sirva proceder con la admisión de la demanda.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



---

**ALVARO JOSE ESCOBAR LOZADA**

**C.C. No. 16.929.297 de Cali**

**T.P. No. 148.850 del C.S. de la J.**

**SEÑOR (A)**

**JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO)**

**E. S. D.**

**REF: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**

**DTE: CARLOS EDUARDO JIMENEZ LOAIZA**

**DDO: COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**

**ÁLVARO JOSÉ ESCOBAR LOZADA** mayor de edad, abogado en ejercicio de la profesión, identificado con la **C.C. No. 16.929.297** de Cali. y portador de la **T.P. No. 148850** del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de **CARLOS EDUARDO JIMENEZ LOAIZA**, identificado con la Cedula De Ciudadanía No. **80.127.286**, que solicito al señor (a) Juez, muy respetuosamente, me sea reconocida personería en la forma y para los fines que se me ha otorgado; me permito formular **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA** contra la **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**., representada legalmente por la Doctora LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN, o por quien haga sus veces para que se reconozcan las siguientes:

#### **PRETENSIONES**

**PRIMERO:** Que se condene a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS., representada legalmente por la Doctora LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN, o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar pensión de invalidez al Señor CARLOS EDUARDO JIMENEZ LOAIZA, a partir del 03 de agosto de 2021, fecha de emisión del dictamen.

**SEGUNDO:** Que se condene a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS., representada legalmente por la Doctora LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN, o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar al Señor CARLOS EDUARDO JIMENEZ LOAIZA, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por la tardanza en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

**TERCERO:** Que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a mi poderdante, todo derecho pensional o prestacional que llegare a probarse en el decurso del proceso, conforme a las facultades ultra y extrapetita que le asiste al juez de instancia.

**CUARTO:** Que se condene en costas y agencias en derecho que se generen por el presente proceso a la entidad de mandada.

#### **HECHOS**

**PRIMERO:** Mi mandante fue valorado por SEGUROS BOLIVAR S.A. quien a través del dictamen No. 6000025158-551 del 03 de agosto de 2021, le determinó una pérdida de capacidad laboral del 69.82%, de origen común, estructurada el 15 de febrero de 2013.

**SEGUNDO:** Es preciso indicar que mi mandante sufrió atentado con arma de fuego el 15 de febrero de 2013, que le produjo *HIPERALGESIA SIN MOVILIZACIIN DE MIEMBROS INFERIORES*, enfermedad clasificada cómo crónica, no obstante, pudo trabajar y aportar al sistema hasta que menguó de manera total su capacidad laboral a partir del 02 de marzo del 2020

**TERCERO:** Si bien mi mandante no cuenta con las 50 semanas de cotización exigidas, dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez; si acredita ese número de semanas sufragadas con anterioridad al 03 de agosto de 2021 fecha del dictamen y acredita un total de 428.43 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, habiendo efectuado su última cotización para el periodo mayo de 2020.

**CUARTO:** Mediante escrito del 19 de enero de 2022, se solicitó ante COLFONDOS S.A., el reconocimiento y pago de la prestación económica de invalidez.

**QUINTO:** A través de comunicación del 26 de enero de 2022, COLFONDOS S.A. indica que no es posible ni siquiera el estudio de la solicitud de mi mandante argumentando como excusa que el poder presentado con el escrito de solicitud carece de la autenticación de la firma del apoderado, (SI ESTA AUTENTICADA LA FIRMA DEL AFILIADO) colocando tramites adicionales que solo entorpecen el derecho de los más necesitados y desconociendo lo presupuestado en él .**DECRETO LEY ANTITRAMITE N°2016 DE 2019 que en sus artículos 1,2,8,9,22, y 23**

**SEXTO:** De conformidad con lo narrado en precedencia y atendiendo los criterios jurisprudenciales, mi acudido sí causo su derecho a la pensión de invalidez.

**SÉPTIMO:** Por la tardanza en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, COLFONDOS S.A. también debe reconocer los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

**DERECHO**

Me permito invocar las siguientes normas:  
Constitución Nacional, Preámbulo Artículos 1, 4, 13, 29, 48 y 53  
Código Sustantivo de Trabajo Artículos 1 al 21  
Código de Procedimiento Laboral Artículo 50  
Ley 100 de 1993 Art. 38, 39 y 141  
Artículo 19 del decreto 656 de 1995.  
Artículo 4 de la ley 700 de 2001.  
Artículo 884 Código de Comercio.  
Decreto 519 de 2007.

**DECRETO LEY ANTITRAMITE N°2016 DE 2019 Que En Sus Artículos 1,2,8,9,22, Y 23**

Todas las normas concordantes

**FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO**

Cuando se trata de enfermedades **crónicas, progresivas, degenerativas, catastróficas** o congénitas, la Corte Constitucional ha establecido que los afiliados pueden disfrutar de la prestación si cumplen con la densidad de semanas, pero contabilizadas a partir de la fecha de emisión del dictamen.

En el presente caso, la fecha del dictamen de calificación es el 20 de enero de 2014, por lo tanto, contados los 3 años hacia atrás, encontramos que en dicho lapso la afiliada había cotizado al sistema más de las 50 semanas que exige la norma y en consecuencia tiene derecho a que le sea otorgada la pensión de invalidez.

Dicha postura ha sido reiterada en diferentes sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la Sentencia T-885 de 2011:

**PENSION DE INVALIDEZ**-Reglas establecidas por la Corte Constitucional para determinar la fecha de estructuración de la invalidez en los casos de enfermedad degenerativa, crónica o congénita:

*Cuando la invalidez es generada por enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, como ocurre con el VIH-SIDA, donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina y se ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma retroactiva, la jurisprudencia constitucional ha establecido precisas reglas para garantizar el derecho a esta pensión. Cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a quien se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma retroactiva, deberá tener en cuenta los aportes realizados al sistema, durante el tiempo comprendido entre dicha fecha, y el momento en que la persona pierde su capacidad laboral de forma permanente y definitiva.*

En otra oportunidad, a través de la sentencia de tutela T-163-11, la H. Corte Constitucional, también aplicó la misma tesis, para resolver un caso análogo al mencionado en precedencia y como el que nos ocupa, para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en condición de invalidez diagnosticadas con enfermedades, congénitas, catastróficas, progresivas y degenerativa, así concluyo el alto tribunal:

*“La peticionaria padece insuficiencia renal crónica terminal. En dictamen del 30 de diciembre de 2009, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Origen de Seguros de Vida Alfa, fue calificada con pérdida de capacidad laboral del 71.91%, de origen común, y con fecha de estructuración de la invalidez el 22 de noviembre de 2008. Pero esta fecha, a pesar de lo que señala el dictamen, no representa el momento en que la accionante perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, como exige el Decreto 917 de 1999. Por el contrario, es la fecha de la calificación de la invalidez, como se señaló en las consideraciones precedentes, la que se debe tener en cuenta, dadas las especiales condiciones de salud de la peticionaria, y el hecho de que ella continuó cotizando al Sistema, a pesar de los síntomas de su enfermedad.*

*En consecuencia, los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, tiempo en el cual la peticionaria debió cotizar 50 semanas al Sistema según lo dispone el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, deben ser contados entre el 30 de diciembre de 2009 (fecha real de su pérdida de capacidad laboral de forma permanente y definitiva), y el 30 de diciembre 2006. En este período, la Sala encontró probado que la accionante cotizó al Sistema más de 80 semanas, es decir, superó las semanas mínimas para acceder a la pensión”.*

Frente a la Contabilización de las 50 semanas cabe resaltar la jurisprudencia vertida por la honorable corte suprema de Justicia en su sala de Casación Laboral tal como lo es en sentencia SL2349-2021 y Radicación N.º 83859 :

“Así las cosas, si bien es cierto que el concepto de *fecha de estructuración* está soportado en aspectos técnicos y científicos que deben seguir los expertos calificadores cuando aplican el manual único de calificación de invalidez al momento de la valoración del paciente, que en vigencia del sistema integral de seguridad social han estado contemplados en los Decretos 692 de 1995, 917 de 1999 y 1507 de 2014, también lo es que no resulta atendible que en un Estado Social de Derecho, como lo es el nuestro, se desconozca la situación material y objetiva que posibilita al afiliado continuar desempeñando una actividad productiva en uso de su capacidad laboral, aún cuando padezca enfermedades crónicas o degenerativas que con el paso del tiempo agotan sus fuerzas hasta impedirle continuar en la vida laboral, situación que no puede ser reprochable para que continúe, paralelamente a ello, realizando cotizaciones, siempre que no se traduzcan en un fraude al sistema de seguridad social.

En la citada sentencia CSJ SL 781-2021, sobre tal razonamiento expresó la Sala:

En esa medida, al encontrarnos ante situaciones *sui generis* originadas por este tipo de

padecimientos, para efectos de tomar el hito de la estructuración de la invalidez, resulta válido acudir a **i) la fecha en que se profiere el dictamen de calificación de la invalidez, ii) la data en que se presenta la reclamación de la pensión de invalidez, o iii) la calenda del último periodo de cotización**; lo anterior, por cuanto resulta razonable entender, que dadas las características especiales de estas patologías, y la manera en que cada una de ellas puede exteriorizarse y tener repercusión en la salud de la persona, la misma puede darse o presentarse en las oportunidades antes anotadas y hacerse notoria su manifestación en la integridad del afiliado (a), impidiéndole o limitándola ser laboralmente productiva, y de contera, generando la condición invalidante.

Precisamente, dada la manera novedosa en que cada uno de estos padecimientos aflora en el individuo, ello conduce a que el operador judicial examine de manera minuciosa en cada caso, y con el fin de evitar una defraudación al sistema pensional, las circunstancias que la rodean, y revise que los aportes efectuados después de la estructuración de la invalidez y en los que se funda la reclamación, sean producto de una verdadera capacidad laboral del afiliado, de tal suerte que la alteración de la data en que la autoridad administrativa dictamina surge la pérdida de capacidad laboral, obedezca a razones probatorias y objetivas que así lo permitan.

De esa suerte, el sentenciador de alzada no incurrió en yerro de orden jurídico al considerar que, en este caso excepcional, la fecha en que realmente el demandante causó el derecho a la prestación era aquella en que efectuó su última cotización en calidad de trabajador dependiente, 21 de enero de 2017, encontrando que para esa data contaba con 100 semanas de cotización aportadas dentro de los tres años anteriores, criterio que se aviene a lo adocetrinado por esta Sala.

Cuando se trata de enfermedades **crónicas, progresivas, degenerativas, catastróficas o congénitas**, la Corte Constitucional igualmente ha establecido que los afiliados pueden disfrutar de la prestación si cumplen con la densidad de semanas, pero contabilizadas a partir de la fecha de emisión del dictamen como lo es en la sentencia SU-588 de 2016.

*“[E]n estos casos, el común denominador es que las personas cuenten con un número importante de semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración que le fue fijada por la autoridad médico laboral. Es por eso que esta Corte ha establecido que, luego de determinar que la solicitud fue presentada por una persona con una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, les corresponde verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, (i) hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y (ii) que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social.*

*Respecto de la capacidad laboral residual, esta Corte ha indicado que se trata de la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita qarantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad. En consideración de este elemento, a la Administradora de Fondos de Pensiones le corresponde comprobar que el beneficiario trabajó y, producto de ello, aportó al Sistema durante el tiempo que su condición se lo permitió o que consideró prudente (en el caso de las enfermedades únicamente congénitas). De la misma manera, tendrá que corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las 50 semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de cotizaciones que resulten de una actividad laboral efectivamente ejercida”* (subraya fuera de texto).

En el presente caso, el dictamen de pérdida de capacidad laboral fue emitido el 03 de agosto de 2021, estando en vigencia para dicha fecha, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, norma que trae como requisito para la obtención de la pensión de invalidez, haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración.

Cuando se trata de enfermedades crónicas, progresivas, degenerativas o congénitas, la CORTE CONSTITUCIONAL, en aplicación del principio de favorabilidad, ha establecido que los afiliados pueden

disfrutar de la prestación si cumplen con la densidad de semanas exigidas por la normatividad vigente, contabilizadas a partir de la fecha de emisión del dictamen de su pérdida de capacidad laboral, tal como lo ha expresado la Corporación en sentencias T-070 de 2014, T-485 de 2014, T-235 de 2015, entre otras.

La Corte Constitucional en Sentencia SU-588 de 2016, fijó reglas específicas extraídas de la jurisprudencia pacífica respecto de la capacidad laboral residual en la que se indicó, específicamente en lo que atañe al presente caso, concluyendo que los afiliados pueden disfrutar de la prestación si cumplen con la densidad de semanas, pero contabilizadas a **partir de la fecha de emisión del dictamen**. Como en el caso presente.

Con todo, se cumplen los presupuestos jurisprudenciales vistos, pues mi mandante está calificado con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% exigido por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y cuenta con más de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de emisión del dictamen de invalidez, o de su pérdida de capacidad laboral definitiva

Con respecto a la negativa de COLFONDOS S.A de contestar la solicitud de reconocimiento, presentada por mi poderdante, mediante apoderado, remitimos a lo que ordena el **DECRETO LEY ANTITRAMITE N°2016 DE 2019 que en sus artículos 1,2,8,9,22, y 23**

*“**Artículo 1 • Objeto.** El presente decreto tiene por objeto simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública, bajo los principios constitucionales y legales que rigen la función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución **mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados modernos y digitales***

***Artículo 2°.** Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todos los organismos, entidades y personas integrantes de la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas o públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.*

***Artículo 8°.** Obligación de uso de los canales digitales entre autoridades. Cuando las entidades habiliten canales digitales para el cumplimiento de sus competencias deberán relacionarse por dichos medios. Únicamente se utilizarán otros medios cuando la ley así lo exija.*

***Artículo 9°.** Servicios Ciudadanos Digitales. Para lograr mayor nivel de eficiencia en la administración pública y una adecuada interacción con los ciudadanos y usuarios, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos, las autoridades deberán integrarse y hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. El Gobierno Nacional prestará gratuitamente los Servicios Ciudadanos Digitales base y se implementarán por parte de las autoridades de conformidad con los estándares que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.*

***Artículo 22.** Estandarización de trámites pensiona/es. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, el Gobierno Nacional estandarizará los plazos, procedimientos, requisitos y formularios que actualmente exigen las Administradoras de Pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad para adelantar los trámites relacionados con el reconocimiento de pensiones del Sistema General de Seguridad Social. Una vez estandarizados los plazos, procedimientos, requisitos y formularios, serán de obligatoria observancia por parte de las Administradoras de Pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.*

***Artículo 23.** Estandarización de trámites sobre cesantías. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, el Gobierno Nacional estandarizará los plazos, procedimientos, requisitos y formularios que actualmente exigen las entidades públicas y las administradoras de fondos de cesantías para adelantar los trámites relacionados con el reconocimiento y pago de cesantías totales y parciales.”*

Desafortunadamente es fácil concluir que la AFP COLFONDOS S.A., en una práctica recurrente y desconociendo además los preceptos legales anteriormente citados intenta dilatar en perjuicio del ser humano los tramites que por legítimo derecho corresponden a los ciudadanos más vulnerables que a ella

acuden, poniendo en riesgo los derechos fundamentales como la vida, la dignidad, el mínimo vital, la seguridad social. Derechos que se están viendo amenazados en mi mandante, al no contar con su apoyo económico pensiona.

#### **Con respecto a los intereses de mora:**

El Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, determina: "INTERESES DE MORA. A partir del 1º. De enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago."

Por otro lado, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en su sala de Casación Laboral, expediente de radicación No. 72552 del 24 de febrero de 2019, ha reiterado la jurisprudencia respecto del carácter resarcitorio de los intereses moratorios, indicando que:

*Conforme al criterio reiterado y pacífico de esta Sala, los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la L. 100/1993 deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativa, en tanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. De ahí que esta Colegiatura ha estimado que la naturaleza de los referidos intereses es resarcitoria y no sancionatoria. (CSJ SL, 23 sept. 2002, rad. 18512).*

Dicha postura ha sido plasmada en múltiples sentencias, entre otras, en CSJ SL, 1 mar. 2011, rad. 44710, CSJ SL 13 jun. 2012, rad 42783, CSJ SL, 13 jun. 20912, rad. 42783, CSJ SL843-2013, CSJ SL-867-2013, CSJ SL-7893-2015 y CSJ SL-10522-2015.

#### **PRUEBAS DOCUMENTALES**

Respetuosamente Señor Juez, solicito que se valoren y tengan como pruebas los siguientes documentos:

- 1) En once (11) folios, copia de la historia laboral de mi mandante Señor CARLOS EDUARDO JIMENEZ LOAIZA.
- 2) En once (11) folios, copia del dictamen de PCL No. 6000025158-551 del 03 de agosto de 2021.
- 3) En cuatro (04) folios, Copia del escrito de la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez presentada a COLFONDOS S.A. el 19 de enero de 2022.
- 4) En dos (02) folios, copia de la respuesta de COLFONDOS S.A. de fecha 26 de enero de 2022.

#### **DECLARACIÓN DE PARTE**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 del Código General del Proceso solicito se decrete la declaración de parte del Señor CARLOS EDUARDO JIMENEZ para que rinda testimonio sobre los hechos del presente proceso.

#### **EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS**

Comedidamente solicito al señor Juez que en virtud del artículo 31, parágrafo 1º num. 2, del C.P.L. y de la S.S., requiera a la entidad demandada para que aporte junto con la contestación de la demanda copia de todo el expediente administrativo pensional de mi prohijado, señor CARLOS EDUARDO JIMENEZ LOAIZA..



## PROCEDIMIENTO, COMPETENCIA Y CUANTÍA

La cuantía del proceso se estima en más de (20) Veinte Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes y la competencia es suya Señor (a) Juez, por la vecindad de las partes.

### ANEXOS

Adjunto los siguientes:

- a. Los documentos indicados al referir la prueba documental.
- b. Poderes para actuar debidamente autenticados.
- c. Copia del certificado de existencia y representación COLFONDOS S.A

### NOTIFICACIONES

1. El demandante podrá ser notificado en la Calle 30ª #12-12 Barrio Benjamín Herrera en Cali Valle. Cel.Tel. 313.3805485/317.6403313 o al correo electrónico: [carlosjcargalibre@hotmail.com](mailto:carlosjcargalibre@hotmail.com)
2. La entidad demandada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, y su representante legal podrán ser notificados en la Avenida 6A No. 23N-41, Cali – Valle, dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales [procesosjudiciales@colfondos.com.co](mailto:procesosjudiciales@colfondos.com.co) (Esta dirección de correo electrónico fue obtenida de la página web de la demandada.
3. El suscrito apoderado en la Calle 13 No. 4 – 25, Piso 12, Edificio Carvajal en la ciudad de Cali, PBX 8470055, Email [procesos@tiradoescobar.com](mailto:procesos@tiradoescobar.com)

De usted, señor (a) Juez, con todo respeto,



**ÁLVARO JOSÉ ESCOBAR LOZADA**

**C.C. No. 16.929.297**

**T.P. No. 148850 del C.S. de la J.**